


 Responder a todos   Eliminar  No deseado Bloquear ...

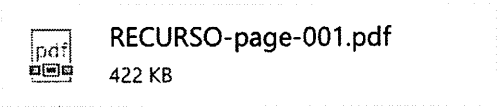
RECURSO RESTITUCIÓN 2020-0188

 Marca para seguimiento.



Yonny Mideros <yonny_f_mideros@outlook.com>
Jue 20/05/2021 11:10 AM
Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Cundinamarca - Fusagasuga

    ...



Buenos días

Adjunto recurso de reposición para el proceso de la referencia.

Atentamente,

YONNY FERNANDO MIDEROS ROSERO
ABOGADO
Celular 315 225 7415

Responder Reenviar

YONNY FERNANDO MIDEROS ROSERO
ABOGADO

Carrera 8ª No. 6 - 49 Oficina 505 Edificio Centrofusa
Celular 315 2 25 74 15
Email yonny_f_mideros@outlook.com
Fusagasugá –Cundinamarca

Señora
JUEZ PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
Fusagasugá – Cundinamarca

REF	VERBAL	No .2020 – 0188
	CLASE	RESTITUCIÓN DE BIEN INMUEBLE
		ARRENDADO
	DEMANDANTE	JOSÉ BERNABÉ SÁNCHEZ LEGUIZAMÓN
		C.C. No. 19.244.569 de Bogotá
	DEMANDADA	LUZ MARINA QUINTERO GUTIÉRREZ
		C.C. No. 21.167.404 de Zipaquirá.

YONNY FERNANDO MIDEROS ROSERO mayor de edad, vecino de Fusagasugá donde tengo mi domicilio, identificado personal y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, actuando conforme el mandato que me ha sido conferido por la señora **LUZ MARINA QUINTERO GUTIÉRREZ**, persona igualmente mayor de edad y con domicilio en Fusagasugá acudo ante ese Despacho en forma oportuna y como siempre respetuosa para referirme a su decisión de mayo 14 hogaño, como quiera que he asistido ante ese juzgado y he obtenido acceso físico al paginarlo, del cual advierto que no se admiten mis argumentaciones pese a lo evidente de las mismas y se ha decidido de manera inconsulta aquellas sentencias emanadas de la Honorable Corte Constitucional que tratan el tema de la reserva sumarial en el proceso penal y la claridad que de ellas emerge, las cuales me sirvieron como elemento jurídico para elevar mi respetuosa petición.

A pesar de lo anterior y revisando el paginarlo, veo que su Despacho en una clara animadversión a mi representación, insiste en requerirme en suministrar una información que en reiteradas ocasiones la he manifestado con lujo de detalles y considerando que así como expone su decisión frente a mi pedimento, olvida que conforme el numeral 4 del artículo del artículo 43 del C.G. del P., es un poder de ordenación e instrucción del juzgador

“EXIGIR A LAS AUTORIDADES o a los particulares la información que, no obstante a ver sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso...”

Esta disposición de orden público, estimo señora Juez, deja sin asidero su convicción hacia el suscrito apoderado cuando expresa en el inciso tercero de la parte considerativa:

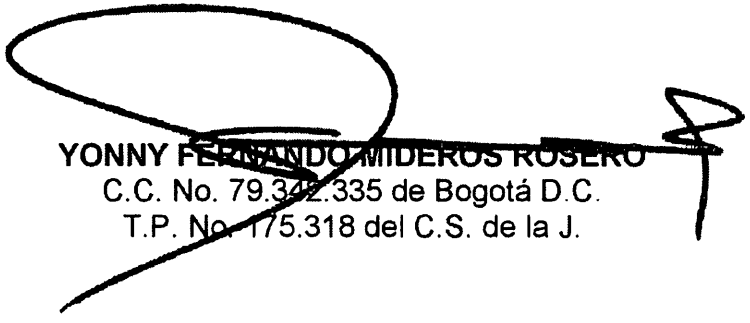
“Nótese entonces que el requerimiento realizado (sic) no implica que deba brindar la información sino (sic) está en su poder o si se encuentra imposibilitado para obtenerla, en virtud de lo cual únicamente habría lugar a que se pusiera en conocimiento del Despacho esa circunstancia, sin ser necesaria la emisión de juicios tales como que el Despacho pretende que se pase por alto una reserva sumarial, pues los mismos configuran acusaciones temerarias.”

Esta manifestación que estimo lejana a su calidad humana y a su incuestionable experiencia y conocimiento como funcionaria judicial, pone de manifiesto una inexplicable contradicción, cuando por auto de abril 9 me requiere en razón de los escritos "presentados por los apoderados" y deja en cabeza de la parte que represento la carga que legalmente el operador judicial tiene todo el poder para EXIGIRLO cuando la imposibilidad para obtenerlo nace de ese Despacho pese a que desde mi orilla he aportado todos los datos necesarios para lograrlo.

Es más, habiendo revisado físicamente el proceso en el día de hoy, veo que su requerimiento el cual insiste en hacerme pese a que la jurisprudencia inconsulta por su Despacho ha sido enfática en señalar que al ser la demanda una simple información a ella también puede acceder la parte indiciada que es la misma parte aquí demandante, se obtiene que ya milita en el paginario la denuncia formulada por mi prohijada desde el 19 de diciembre de 2019 una vez sus derechos fueran atropellados deliberadamente por el aquí demandante, entre otros, sus cómplices y determinadores, llevando a que ese mismo Despacho judicial admitiera como válida una notificación que a la simple vista resulta ilegal, inconstitucional y hasta delincuencial y la llevara a suscribir un nuevo contrato que ahora es materia de juicio verbal ante ese mismo Despacho.

Con el respeto que me caracteriza, con la convicción y argumentación jurídica con que ejerzo mi profesión acudo una vez mas a su Despacho para que se **REVOQUE** ese requerimiento de abril 9 ratificado el 14 de mayo en razón a las razones expuestas en este escrito y ante la evidencia que milita en autos se proceda a resolver lo que en derecho corresponda siempre bajo la presunción y principio de legalidad solicitud que elevo con fundamento en el inciso cuarto del artículo 318 ej.

Atentamente,



YONNY FERNANDO MIDEROS ROSERO
C.C. No. 79.342.335 de Bogotá D.C.
T.P. No. 175.318 del C.S. de la J.


⌵ ⏪ Responder a todos ⌵ 🗑 Eliminar ⛔ No deseado Bloquear ⋮

RESTITUCIÓN 2020-0188



Yonny Mideros <yonny_f_mideros@outlook.com>
Jue 20/05/2021 11:19 AM
Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Cundinamarca - Fusagasuga

👍 ↶ ⏪ → ⋮

 **RESTITUCIÓN 2020-0188.pdf**
463 KB

Buenos días

Adjunto memorial con anexos para el proceso de la referencia.

Atentamente,

YONNY FERNANDO MIDEROS ROSERO
ABOGADO
Celular 315 225 7415

Responder Reenviar

YONNY FERNANDO MIDEROS ROSERO
ABOGADO

Carrera 8ª No. 6 - 49 Oficina 505 Edificio Centrofusa
Celular 315 2 25 74 15
Email yonny_f_mideros@outlook.com
Fusagasugá –Cundinamarca

Señora
JUEZ PRIMERO CIVIL MUNICIPAL
Fusagasugá – Cundinamarca

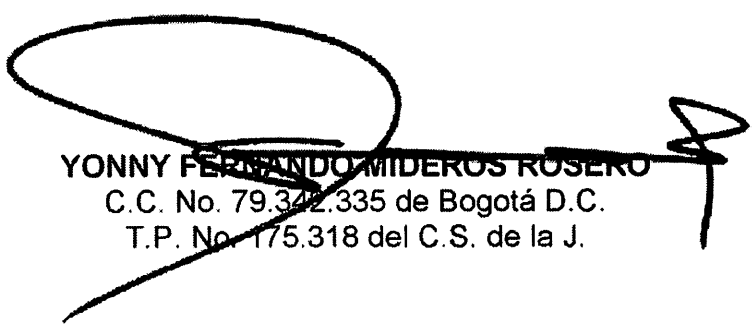
REF	VERBAL	No .2020 – 0188
	CLASE	RESTITUCIÓN DE BIEN INMUEBLE
		ARRENDADO
	DEMANDANTE	JOSÉ BERNABÉ SÁNCHEZ LEGUIZAMÓN
		C.C. No. 19.244.569 de Bogotá
	DEMANDADA	LUZ MARINA QUINTERO GUTIÉRREZ
		C.C. No. 21.167.404 de Zipaquirá.

YONNY FERNANDO MIDEROS ROSERO mayor de edad, vecino de Fusagasugá donde tengo mi domicilio, identificado personal y profesionalmente como aparece al pie de mi firma, actuando conforme el mandato que me ha sido conferido por la señora **LUZ MARINA QUINTERO GUTIÉRREZ**, persona igualmente mayor de edad y con domicilio en Fusagasugá acudo ante ese Despacho en forma oportuna y como siempre respetuosa para adjuntar copia de la providencia emanada de la **HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**, con ponencia del H Magistrado Dr. Luis Armando Tolosa Villabona, revoca la decisión del Honorable Tribunal y concede a mi mandante el amparo constitucional y ordena al **JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO** oficie para efecto de cancelar la escritura pública 2791 de 11 de octubre de 2018 por medio de la que se vende el inmueble vinculado a este proceso mediante “contrato de arrendamiento” de diciembre 19 de 2020.

Y es que, señora Juez, estas personas, el demandante, makrovivienda, sus complaces y determinadores, vienen engañando a la administración de justicia desde hace ya un buen tiempo obteniendo decisiones favorables con pruebas documentales falsas.

Todo está relacionado. No como es apenas obvio, lo pretende hacer ver la parte actora. En el proceso aparecen las pruebas.

Atentamente,


YONNY FERNANDO MIDEROS ROSERO
C.C. No. 79.342.335 de Bogotá D.C.
T.P. No. 175.318 del C.S. de la J.



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado ponente

STC1057-2021

Radicación n.º 25000-22-13-000-2020-00357-01

(Aprobado en sesión virtual de diez de febrero de dos mil veintiuno)

Bogotá, D. C., once (11) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

Decide la Corte la impugnación interpuesta respecto a la sentencia proferida el 1º de diciembre de 2020 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la tutela promovida por Luz Marina Quintero Gutiérrez contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Fusagasugá, con ocasión del juicio ejecutivo iniciado por la aquí petente frente a Makro Vivienda Constructora Inmobiliaria S.A.S., con radicado n.º 2019-0445.

1. ANTECEDENTES

1. A través de apoderado judicial, la promotora exige la protección de sus garantías al debido proceso, igualdad,

legalidad, confianza y acceso a la administración de justicia, presuntamente conculcadas por la autoridad accionada.

2. En apoyo de su queja, asevera, en síntesis, que inició juicio de resolución de promesa de compraventa en contra de Makro Vivienda Constructora Inmobiliaria S.A.S., el cual correspondió al estrado convocado, quien, en sentencia de 1º de marzo de 2019, accedió a sus pretensiones.

Sin embargo, la decisión fue apelada por la gestora, al estar en desacuerdo con la cuantificación de las indemnizaciones fijadas, recurso resuelto favorablemente el 21 de agosto de 2019.

Refiere que, tanto en el proceso verbal como en el curso del compulsivo seguido a continuación de aquél, ha presentado varios requerimientos reclamando dar cumplimiento al inciso 4º del artículo 591 del Código General del proceso¹, pero, a la fecha, el despacho confutado no le ha dado respuesta efectiva.

Agrega que, el 27 de febrero de 2020, pidió al juzgador querellado, decretar el embargo del inmueble con folio de matrícula inmobiliaria n°157-125611, sin que, a la fecha, haya obtenido respuesta.

¹ “(...) Artículo 591. (...) Si la sentencia fuere favorable al demandante, en ella se ordenará su registro y la cancelación de las anotaciones de las transferencias de propiedad, gravámenes y limitaciones al dominio efectuados después de la inscripción de la demanda, si los hubiere; cumplido lo anterior, se cancelará el registro de esta, sin que se afecte el registro de otras demandas. Si en la sentencia se omitiere la orden anterior, de oficio o a petición de parte, la dará el juez por auto que no tendrá recursos y se comunicará por oficio al registrador (...)”.

3. Pide, por tanto, ordenar al estrado confutado resolver las solicitudes presentadas en el aludido proceso verbal

“(...) en fechas 4 de octubre de 2019, febrero 5 y 27 de 2020 y 11 de noviembre de 2020, relacionadas con oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fusagasugá y Notaría Segunda de Fusagasugá, para que de conformidad con lo señalado en el inciso 4º del artículo 591 del CGP se CANCELEN las anotaciones posteriores a la inscripción de la demanda en el certificado de tradición No. 157-125611 y la escritura pública No. 2791 de octubre de 2018 y se tomen las demás decisiones que conforme a la norma en comento resulte[n] procedente[s]; se oficie a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fusagasugá y Notaría Segunda de Fusagasugá comunicando la medida cautelar “elevada y a ser decretada” (...).”

E, igualmente, atender a la petición deprecada en el ejecutivo n.º 2019-00445 *“(...) relacionada con el embargo del inmueble con folio de matrícula inmobiliaria 157-125611 (...).”*

1.1. Respuesta del accionado

La autoridad convocada afirmó que, en auto del 11 de junio de 2020, decretó el embargo del inmueble identificado con matrícula 157-125611, librándose el oficio n.º 630 del 29 de octubre 2020 con destino a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fusagasugá y, aunque no fue retirado por la peticionaria, con fundamento en el Decreto 806 de 2020, éste se remitió al correo electrónico de dicha entidad.

En cuanto a las solicitudes presentadas en el proceso verbal con radicado n.º 2018-0348, indicó que, en proveído de 1º de junio de 2020, “(...) *ordenó el registro de la sentencia, cancelación de medidas cautelares e inscripciones posteriores a la anotación de inscripción de la misma demanda en el folio de matrícula inmobiliaria del bien trabado en la litis (...)*”.

En respuesta adicional, señaló que, aun cuando, por un error involuntario de la secretaría del juzgado, se omitió librar el oficio dirigido a la Oficina de Registro, éste ya fue elaborado y se encuentra a disposición de la interesada para lo pertinente.

1.2. La sentencia impugnada

El *a quo* negó la protección al encontrar acreditada la configuración de un hecho superado.

1.3. La impugnación

La impetró la actora señalando que persiste la vulneración alegada, por cuanto el juzgado no ha ordenado oficiar a la Notaría Segunda de Fusagasugá poniendo en su conocimiento las decisiones de fondo tomadas en el decurso declarativo, con el objeto de proceder a la cancelación de la escritura pública n.º 2791 de 2018.

Además, indicó que no se ha dado respuesta frente a su solicitud de embargo del inmueble identificado con

matrícula inmobiliaria n.º 157-125611 ni emitido las comunicaciones respectivas, pues el oficio elaborado por el juzgado consignó el folio n.º 157-125601.

2. CONSIDERACIONES

1. A través de apoderado judicial, la actora cuestiona que, al interior del juicio de resolución de promesa de compraventa por ella seguido en contra de Makro Vivienda Constructora Inmobiliaria S.A.S.², el estrado convocado no haya expedido los oficios dirigidos a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fusagasugá y a la Notaría Segunda del mismo municipio con el objeto de cancelar las anotaciones posteriores a la inscripción de la demanda, visibles en el certificado de tradición del inmueble con matrícula inmobiliaria n.º 157-125611.

Por otra parte, reprocha que en el proceso ejecutivo³ seguido a continuación del asunto verbal referenciado, el juzgador accionado no haya decretado el embargo del predio antes indicado.

2. Revisada la actuación surtida en el compulsivo criticado, se advierte que, por auto de 11 de junio de 2020 el juez convocado decretó el embargo y secuestro del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria n.º. 157-125611 y en oficio n.º. 630 del 29 de octubre 2020,

² Radicado n.º 2018-0348.

³ Radicado n.º. 2019-0445.

remitido a través de correo electrónico, el 23 de noviembre de 2020, comunicó tal cautela a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Fusagasugá.

Así las cosas, en lo atinente al juicio ejecutivo cuestionado, se disipan los supuestos fácticos sobre los cuales la aquí actora encauzó la presunta vulneración a sus prerrogativas, pues, conforme a las pruebas aquí allegadas, pudo constarse que el oficio elaborado por el juzgado accionado corresponde al inmueble con matrícula inmobiliaria n.º 157-125611 y no al folio n.º 157-125601, como se afirmó en el escrito de impugnación; razón por la cual, administrar justicia constitucional para el caso concreto, se torna inane.

Sobre la figura del hecho superado, esta Sala ha indicado:

“(...) [L]a decisión del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de éstos la justificación y el propósito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ningún sentido tiene que el fallador imparta órdenes de inmediato cumplimiento en relación con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan características totalmente diferentes a las iniciales (...)”.

“El ‘hecho superado o la carencia de objeto’ (...), se presenta: ‘si la omisión por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensión erigida en defensa del

*derecho conculcado está siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y razón de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecería de sentido (...)*⁴.

3. En lo atinente al proceso verbal con radicado n.º. 2018-0348, también se observa la configuración de un hecho superado al constatarse que, por oficio n.º 770 del 26 de noviembre de 2020, se comunicó a la Oficina de Instrumentos Públicos de Fusagasugá, el registro de la sentencia y cancelación de las medidas cautelares.

Sin embargo, de la información aquí allegada, no pudo verificarse que, conforme a lo antelado, se emitiera pronunciamiento o comunicación alguna, en respuesta a la solicitud de la interesada de ordenar a la Notaría Segunda de dicho municipio la cancelación de la escritura pública n.º 2791 de octubre de 2018. Por lo anterior, se concederá el amparo incoado, pero, específicamente, en aras de que el juzgado accionado provea sobre el particular.

4. Deviene fértil abrir paso a la protección incoada, dado el control legal y constitucional que atañe en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San José de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso.

⁴ CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01.

El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constitución Nacional, cuando dice:

“(...) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (...).”

Complementariamente, el artículo 93 *ejúsdem*, contempla:

“(...) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno”.

“Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (...).”

El mandato 27 de la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados de 1969⁵, debidamente ratificada por Colombia, según el cual: *“(...) Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado (...).”*⁶, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo.

4.1 Aunque podría argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad sólo en decursos donde se halla el quebranto de garantías sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar

⁵ Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.

⁶ Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.

dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcación de prerrogativas *iusfundamentales*, así su protección resulte procedente o no.

Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el ámbito doméstico, a través de la verificación de la conformidad de las normas y prácticas nacionales, con la Convención Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que según la Corte Interamericana se surte no sólo a petición de parte sino *ex officio*⁷.

No sobra advertir que el régimen convencional en el derecho local de los países que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicación en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con carácter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino también el convencional; con mayor razón cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno.

4.2. El aludido control en estos asuntos procura, además, contribuir judicial y pedagógicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia⁸, a impartir una formación permanente de

⁷ Corte IDH. Caso Gudiél Álvarez y otros ("Diario Militar") contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, párrafo 330.

⁸ Corte IDH, Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, párrs. 259 a

Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jerárquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales⁹; así como realizar cursos de capacitación a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campañas informativas públicas en materia de protección de derechos y garantías¹⁰.

Insistir en la aplicación del citado control y esbozar el contenido de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no sólo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contraídas internacionalmente, en relación con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadanía informarse en torno al máximo grado de salvaguarda de sus garantías.

Además, pretende contribuir en la formación de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protección de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos.

5. Por lo discurrido, se revocará la providencia examinada.

290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, párrs. 295 a 323.

⁹ Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párrs. 229 a 274.

¹⁰ Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, párrs. 278 a 308.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la providencia de fecha y procedencia anotada.

En consecuencia, se **CONCEDE** el amparo incoado y, en su lugar, se ordena al estrado accionado que, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta decisión, emita un nuevo pronunciamiento, en torno a la solicitud de la actora de oficiar a la Notaría Segunda del Círculo de Fusagasugá.

SEGUNDO: Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.

TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Presidente de Sala



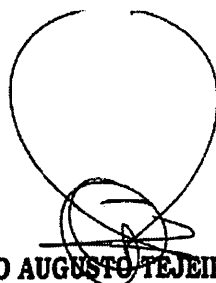
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
Magistrado



AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado



LUIS ALONSO RICO PUERTA
Magistrado



OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
MAGISTRADO



LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
Magistrado